

## **Televisiones públicas: ¿déficit a cuenta de la sociedad?**

**E**L pasado mes de octubre, Javier González Ferrari, director del Grupo RTVE, presentó ante el Congreso el anteproyecto del ente público para el 2001 del ente público, con una previsión de gastos para TVE y sus empresas filiales por 265.148 millones de pesetas (10,36 por 100 de aumento respecto del ejercicio anterior); y unos ingresos de 146.163 millones (4,4 por 100 más), que se distribuyen entre 132.018 millones por publicidad, 12.833 millones por subvención del gobierno y 1.312 millones accesorios (*sic*) sin especificar. El endeudamiento autorizado será de 133.700 millones, cantidad que se sumará a la deuda acumulada de 661.500 millones. Aunque no oficialmente aún, se anuncia la integración de RTVE a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el antiguo INI), dependiente del Ministerio de Hacienda tras la desaparición del de Industria y Energía el pasado mes de abril, que agrupa empresas participadas por el Estado para su saneamiento. La confirmación de esta transferencia podría abrir la puerta hacia la

*privatización. Ante el baile de cifras que nos sume en la perplejidad, los ciudadanos no podemos menos que preguntarnos hasta cuándo debemos seguir costeando con nuestros impuestos empresas públicas ruinosas; y si es justo aceptar esta situación como si de un **fatum** inexorable se tratara. Una simple mirada a la programación televisiva pública abre otro interrogante: ¿tanto dinero para **esto**?; y, ante otros procesos privatizadores en curso o ya consumados, con escandalosos altibajos incluidos, ¿es privatizar la solución?*

### **Deuda crónica, ingente pero poderosa**

**DESDE** la anterior administración socialista de RTVE y a pesar de los planes inconclusos de los sucesivos directores de la etapa **popular** —Mónica Ridruejo, Fernando López-Amor y Pío Cabanillas—, la deuda histórica de esta empresa pública de más de diez mil empleados sigue ascendiendo y superará los 700.000 millones de pesetas a finales de año. Pero al **debe** de las dos cadenas estatales —la Primera y la 2— hay que sumar el entramado de las once autonómicas en funcionamiento, a las que se añadirán muy pronto tres más en proyecto. Además, existen 741 canales locales en 553 municipios, cuyas cuentas están veladas por el misterio. En definitiva, iniciaremos el 2001 con más de mil millones de deuda televisiva. No es posible dar cifras exactas porque la opacidad es una constante en los datos proporcionados por los responsables, como si no estuvieran obligados a rendir cuenta del patrimonio común que gestionan.

*El panorama televisivo español refleja la desestructuración autonómica del Estado: cada autonomía o ayuntamiento quiere tener su propio órgano de difusión audiovisual al precio que sea y, en su caso,*

con su lengua propia. Lo importante es contar con el más poderoso medio de influencia y de autopromoción. El medio sirve para repartir favores, tener el apoyo de plantillas sobredimensionadas, controlar los hilos de la información y de la diversión respecto del **soberano**, difundir campañas e inauguraciones, ganar elecciones —la televisión permite llegar a millones de electores; sin ella, los políticos podrían sólo convencer a millares—; y hasta para engrosar las arcas de productoras propias o de amigos, que son las únicas con posibilidades de aprobación de proyectos. No es extraño que los presidentes autonómicos que aún no cuentan con televisión **propia**, aboguen por ella comprometiendo ingentes partidas presupuestarias para empresas que, de entrada se sabe que serán ruinosas. Los canales autonómicos han caído incluso en peores excesos que TVE, con la creación de elefantiásicos aparatos de personal, con la contratación multimillonaria de productoras cercanas a la dirección de turno para la realización de programas que sustituyen en demasiadas ocasiones la cultura por sesiones de **telebasura** en las que el protagonismo corresponde a **famosos** del papel couché y a las pasiones más bajas del ser humano corriente.

**AUNQUE** es innegable el valor cultural de la programación de la 2 —con muy bajos índices de audiencia, lo que no deja de ser inquietante—, la Primera compite con las privadas con sus mismas armas. A pesar de las subvenciones públicas y de la función esencial cultural y educativa de la televisión pública, priman los criterios comerciales: conseguir beneficios económicos a toda costa, compitiendo con las privadas por las inversiones publicitarias. Incluso los espacios informativos se adhieren a la estética y a la práctica del sensacionalismo, del amarillismo, de la violencia, por que estos contenidos **venden**. Los

*programas culturales de TVE y de las autonómicas quedan marginados a las últimas horas de la noche. Pero a pesar del éxito de Morancos y Tómbolas, y del sacrificio de la cultura, la deuda sigue creciendo.*

### **Privatizar no es la panacea**

*PARA financiar la televisión pública prescindiendo de la publicidad que condiciona audiencias y contenidos, se barajan varias alternativas, entre otras, privatizar, cobrar un canon fijo por televisor, o fórmulas mixtas. Pero antes de definir una modalidad, es imprescindible y urgente reformular el estatuto de servicio público de la televisión, máxime cuando se anuncia una verdadera revolución con la próxima aparición de nuevas cadenas comerciales, de la difusión del cable y de la televisión digital. No cabe la improvisación en materia tan delicada. La privatización total o parcial de las televisiones públicas, según las leyes ciegas del mercado, no garantiza, de ningún modo, ni la mejora de contenidos ni la solución económica. Por el contrario, la búsqueda de la rentabilidad inmediata, en audiencia y en beneficios publicitarios, tan característica de las privadas, agudizaría el problema. En la que algunos llaman la **década abominable de la televisión española**, que se inicia precisamente con la aparición de las privadas, la pública ha entrado en el juego de la competencia con programas en algunos casos tan funestos para la educación y la información del televidente que constituyen una flagrante contradicción de los objetivos que debería cumplir un órgano de difusión con financiación estatal. En Alemania —la cadena ARD, con 11 difusoras regionales, y la ZDF de carácter nacional— y en Inglaterra —la BBC— se cobran cuotas anuales que se compensan con la calidad de los programas y la ausencia de anuncios publicitarios. La RAI italiana, que*

*también tiene déficit, financia sus tres cadenas en parte con publicidad y en parte con un canon obligatorio para quien posea un televisor. El Grupo France Télévision que comprende las dos grandes cadenas, France 2 y France 3, de cobertura nacional y de difusión nacional con programación regional respectivamente, también tiene un modelo mixto de financiación. Cualquiera que sea el modelo, ningún país de la UE castiga al telespectador con tanta **carga publicitaria** —en algunas cadenas, 1 minuto por cada 4 de programación— ni cuenta con un aparato regional tan amplio como el nuestro.*

*La falta de definición de un modelo de televisión pública, de quién debe correr con los gastos, de programaciones adecuadas, refleja el déficit de originalidad, de imaginación y de eficacia de los gestores y políticos responsables. La solución no llega, aunque en más de un programa electoral es una promesa reiterada. No son pocos los que afirman que la televisión española está a la cabeza de la UE en vulgaridad, en la práctica deshonestas y multiplicadora de lo indeseable que constituye la contra-programación; y más aún, en la situación de despilfarro del dinero público o en la abusiva inclusión publicitaria. Sería muy recomendable un estudio serio, a cargo de expertos, de las soluciones —y de los problemas— del exterior, como paso previo a la toma de cualquier decisión en nuestro medio. Nuestra pertenencia a la UE, de la que tanto nos ufanamos, debe notarse también en la calidad audiovisual. ¿Qué dicen al respecto los comisarios europeos?*

***A modo de conclusión: por una reforma imprescindible e impostergable***

***LA*** *televisión pública estatal tiene una función fundamental y necesaria: contribuir a la*

unidad lingüística y política del territorio español. Prácticamente es el factor más importante –tal vez el único– del que disponemos en esta hora de fragmentación autonómica, territorial y cultural. Es comprensible que se destinen recursos a este fin; pero, con la programación actual, poco se puede lograr en cuanto a los objetivos de formación e información deseables. Respecto de las autonómicas, ¿es igual de útil para el país la diversificación promovida por las comunidades? Y en torno al papel de difusión exterior, que debería cumplir el Canal Internacional, su exigua calidad hace apremiante una mejor programación. Nadie duda del poderoso efecto de la televisión, de su poder, como demuestran las cifras de publicidad que en ella se manejan, la fuerza de su mensaje en la conformación de la opinión pública y la obstinada lucha por preservarlo. Por eso mismo la responsabilidad del Estado en cuanto a su gestión es mayor aún si cabe: debe proporcionar información objetiva, contribuir a la educación de las jóvenes generaciones –que, como indican las encuestas, pasan más horas frente al televisor que en la escuela– con la calidad de sus propuestas como prioridad, y sin caer en la tentación de rentabilidad inmediata y competencia con las privadas. Entre los miles de trabajadores de su plantilla existen profesionales capaces, como lo demuestra la historia del ente en décadas pasadas; pero precisamente son los postergados que esperan la jubilación anticipada o la contratación por parte de las privadas.

**POR** el hecho de ser pública, la televisión no tiene por qué resultar deficitaria; y la excusa de que el público demanda **telebasura** y que eso hay que darle es deshonesto, cínico, inadmisibles en su caso. Si los actuales responsables de su gestión no son capaces de encontrar la vía adecuada para su renovación, para el diseño de programas informativos, de entretenimiento y

*culturales de calidad y rentables a la vez, sin caer en la vulgaridad, ni en la manipulación ni en la violencia, ni en el deterioro manifiesto del idioma, se impone su apartamiento definitivo de sus carísimos cargos. Este saneamiento será muy de agradecer: no cabe sostener, con los recursos de todos, productos y productores que deseducan, intoxican o deforman. Algo se ha reducido la plantilla de personal de TVE, pero falta mucho para llegar a las dimensiones racionales. Y habrá que sustituir el **laissez faire** de productoras y gobiernos, por órganos plurales de control social verdaderamente eficaces —está claro que el supuesto control parlamentario no lo es— en los que estén presentes no sólo los partidos políticos —que sólo parecen preocuparse por las cuotas de pantalla en tiempos de elecciones—, sino también y muy especialmente, expertos y representantes autorizados del ámbito educativo y familiar; de asociaciones de profesionales y de consumidores; de organismos dedicados a la defensa del niño y de los derechos del ciudadano en general... La sociedad civil no debe ser una destinataria pasiva, y menos si paga. La democracia tiene que procurar siempre la mejora del nivel educativo general; y consiste en poner bajo control el poder político (Popper). Es lo mínimo para que pueda calificarse como un servicio público sin faltar a la verdad. Hay mucho por hacer; lo que no sabemos es cuándo se pondrán definitivamente manos a la obra, ni con qué ideas. La situación no se sostiene ya y han sido muchas, demasiadas, las promesas incumplidas.*